

2-425-18

FM
439

INFORME
DEL
EXCMO. SR. CONDE DE ROMANONES
ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID,
Á LA COMISIÓN TERCERA,
sobre el expediente de arrendamiento del servicio de limpiezas.



MADRID
—
IMPRESA MUNICIPAL
1897.

INFORME

DEL

EXCMO. SR. CONDE DE ROMANONES

ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID,

Á LA COMISIÓN TERCERA,

sobre el expediente de arrendamiento del servicio de limpiezas.



Reg. 2142.

MADRID

—
IMPRENTA MUNICIPAL

1897.

Á LA COMISIÓN TERCERA

Esta Alcaldía accedió, no sin gran contrariedad de su ánimo, al deseo de esa Comisión de que formulara dictamen en el expediente del arrendamiento del servicio de limpiezas; lo hizo porque en tal encargo se envolvía una expresión de confianza que el Alcalde agradece á la Comisión, pero conviene que conste como entendió siempre que este expediente era de los más difíciles y enmarañados que han surgido en la no menos complicada y difícil Administración municipal, aunque nunca creyó que fuera en tan alto grado cual en realidad aparece.

Ha procurado estudiarlo en todos sus detalles y en todos sus múltiples desenvolvimientos, y el resultado de su juicio es el que somete al juicio de dicha Comisión.

No han pesado en su ánimo más que las razones y los hechos que en el mismo expediente se contienen; ha procurado olvidar lo que pudiera llamarse historia íntima de este expediente (que no es poco olvidar) y en sus conclusiones no le ha animado otro deseo que el de poner término á una situación por todos extremos insostenible para la buena administración municipal, contraria al buen nombre de este Ayuntamiento y absurda en el orden legal.

Entiende que con las soluciones propuestas se termina, dentro de la esfera municipal, este enojoso asunto y se garantizan toda clase de responsabilidades en el caso que hubiera alguien que quisiese buscar los medios de protesta que las leyes conceden contra los acuerdos municipales.

Como el asunto es, lo repito, en extremo dificultoso, ha procurado la Alcaldía tratar por separado las diversas cuestiones que contiene, y de ahí el método empleado y la necesidad de comenzar por un breve extracto del expediente.

Antes de entrar en el examen de las cuestiones jurídicas planteadas en el expediente de la contrata de los servicios de limpiezas y relativas á la situación y derechos que, con arreglo al convenio de 13 de Abril de 1895, corresponden al Ayuntamiento de Madrid, á los concesionarios Sres. Vanden, Eyden y Delooz y á la Sociedad general de Saneamiento, interesa presentar las etapas principales de la historia de este asunto.

Breve extracto del expediente.

El pliego de condiciones facultativas se aprobó en varias sesiones; la última es la de 3 de Noviembre de 1894, y en ella quedó asimismo acordado el pliego de las condiciones económico administrativas que á su vez fué sancionado por la Junta Municipal en sesión de 22 de Diciembre del mismo año.

Anunciada la subasta y verificada, entre otras proposiciones, se presentó una firmada por D. Carlos Vanden Eyden y D. Francisco Delooz, quienes «mancomunadamente» y enterados de las condiciones «se comprometían á tomar á su cargo los servicios subastados por el término de 30 años». En su virtud se les hizo adjudicación definitiva, pero también «mancomunadamente» por acuerdo del Ayuntamiento de 13 de Febrero de 1895 y se otorgó la escritura de concesión en 13 de Abril siguiente.

Los concesionarios para ejercitar el derecho de transferir la concesión á una Sociedad, constituyeron en Bruselas con la cooperación de otras personas, la llamada Sociedad general de Saneamiento, mediante escritura pública de 28 de Junio del citado año.

Uno de los concesionarios mancomunados, el Sr. Delooz, que como tal mancomunado venía obligado á obrar *de mancomún* con el señor Vanden ejercitando sus acciones y derechos bajo la firma de ambos y no con la firma de uno solo, en escritos de 11 de Julio, 2 de Agosto y 13 de Agosto de 1895 (expediente de documentos de la Sociedad) se limitó á dar cuenta de que se había transmitido la concesión á una Sociedad constituida en Bruselas, como si la transmisión acabada y perfecta no demandase la aprobación de la otra parte, ó sea del Excelentísimo Ayuntamiento.

En cuanto al Sr. Vanden Eyden, importa tener presente el hecho muy significativo de que dicho señor, uno de los concesionarios mancomunados, una vez otorgada la escritura de concesión y devueltos los planos y memorias de sus privilegios, ha desaparecido de la escena en que se ventilan cuestiones que afectan á la vida y eficacia de la concesión, como si no le interesara nada referente á la misma.

Por el contrario, el Sr. Delooz entendió, y entendió bien, que no era suficiente cumplimiento de sus obligaciones de concesionario, la mera constitución de la Sociedad y aportación á la misma de la concesión, sino que hizo al Ayuntamiento las manifestaciones de los escritos referidos *calculados*, y penetrado por completo de sus obligaciones como adjudicatario, añadió en el *escrito* de 2 de Agosto «que el Ayuntamiento tuviese la bondad de dar por satisfechos y cumplidos los requisitos que se me impusieron como concesionario, á fin de eximirme de toda responsabilidad subsiguiente.» Además de reconocerse en esta cláusula que el Ayuntamiento no desempeñaba un papel pasivo respecto á la transferencia, sin más facultad que la de un *enterado*, contiene el escrito en esta parte, idea que luego se desarrollarán. Baste ahora con lo consignado en concepto de hechos y poniendo de relieve la retirada del Sr. Vanden Eyden y la gestión del Sr. Delooz.

Por su parte D. Luis M. de Pando como Administrador Delegado de la Sociedad, en su escrito de 3 de Agosto de 1895, tampoco planteó categóricamente que se aprobara la transferencia, sino que expresó «que quedaba cumplido el requisito de dar cuenta de la constitución de la Sociedad.»

En tal estado de hecho, sin que nadie pidiera por parte de la Sociedad, explícitamente (todo lo que remueve la sospecha de un plan) que se aprobara la transferencia, y sin que entonces se hubiese presentado mas documento que el acta, ante Maese Ectors, constituyendo la Sociedad, acudió el Administrador Sr. Pando y pidió en 8 de Septiembre de 1895, que se señalara día para comenzar á ejecutar los servicios de limpiezas por cuenta de la Sociedad general de Saneamiento.

Nótese que con arreglo al contrato (condiciones sexta y séptima) la fábrica de transformación de materias fecales, era preciso estuviese terminada y en disposición de funcionar para el día 13 de Septiembre de 1895, en que comenzaba el cumplimiento de la contrata por parte del concesionario; pues bien, el Sr. Pando reconoce en ese escrito que la fábrica no estaba concluida, ni las demás construcciones anejas á la misma, calificándose la falta de requisito tan capital, como «detalle importante.»

A ese escrito recayó el acuerdo del Ayuntamiento de 20 de Septiembre de 1895, que se compone del informe de la Comisión tercera (pieza primera, folio 305) y de las salvedades, acordadas. En el informe, proposición séptima, consta que el contrato en su cláusula séptima no estaba cumplido, y si bien al final del informe se deslizaron conceptos dudosos relativos á la subrogación, el Ayuntamiento rectificó toda esta parte con las salvedades que acordó, y que fueron las de que se diera posesión interina á la Sociedad, de los servicios, «entendiéndose que esta toma de posesión será provisional y sin que prejuzgue derecho alguno á favor de la Sociedad.» Este acuerdo está consentido por la Sociedad, pues no reclamó contra él, y se notificó á D. Luis M. de Pando en 22 de Septiembre (pieza primera, folio 308).

El día 24 de Septiembre se verificó la entrega provisional de los servicios á la Sociedad general de Saneamiento.

Después de la entrega, se promovió por varios Concejales un expediente para depurar como cumplía la Sociedad. Se refiere á este expediente la pieza segunda. En ella se tratan por el ponente de la Comisión tercera, Sr. Ortiz de Pinedo (D. Manuel) y por el Cuerpo de Letrados, diferentes cuestiones relativas á si la Sociedad, con arreglo á sus estatutos, se había obligado al cumplimiento de la escritura de concesión de 13 de Abril de 1895, y á si, aparte el punto anterior, las reglas consignadas en los estatutos sociales sobre duración y domicilio de la Sociedad, permitían y hacían posible dentro de la ley española constituida por el contrato de 13 de Abril, el Real decreto de 4 de Enero de 1883 y el Derecho civil español, como complemento del administrativo español en la parte de contratación; ley española, que es la única aplicable á las relaciones de derecho entre los mancomunados adjudicatarios Vanden y Delooz y el Ayuntamiento de Madrid, que esta Corporación aprobase la transferencia de la concesión en la forma intentada. De la discusión mencionada importa, por ahora, recoger dos hechos, á saber: 1.º Que los Letrados Consistoriales, en pleno, reconocen en sus informes de 23 de Julio y 27 de Noviembre de 1896, la necesidad de que antes de la entrega definitiva de los servicios á la Sociedad, debe, «para garantizar los intereses y derechos del Municipio, otorgarse la escritura de subrogación del contrato que previene el artículo 25 del Real decreto de 4 de Enero de 1883». (Folio 30, pieza segunda). Y 2.º Que los mismos Letrados, en el informe calendado de 27 de Noviembre, al contestar á las preguntas séptima y octava, atinadamente formuladas por el Concejil Sr. Ortiz de Pinedo, reconocen que en esa fecha no existía vínculo legal alguno *relativo á la subrogación* entre la Sociedad y el Ayuntamiento, no existiendo más lazo de deber que el de pagar los servicios que por encargo provisional de la Corporación venía ejecutando la Sociedad. También reconocen los Letrados que los concesionarios Vanden y Delooz venían obligados á transmitir sus derechos, al hacer la transferencia á una persona capaz, á juicio

del Ayuntamiento. De estos dos hechos se desprende un tercero muy capital para las consideraciones de derechos ulteriores, y es que á los diecinueve meses de la escritura de 13 de Abril de 1895, la Sociedad general de Saneamiento no ostentaba, ni podía judicial ni extrajudicialmente ostentar en frente del Ayuntamiento el derecho de los concesionarios Vanden y Delooz, por no haber sido aprobada todavía la subrogación necesaria.

Es decir que en 27 de Noviembre de 1896, el unico concesionario, la unica personalidad que podia ejercitar derechos y demandar al Ayuntamiento, era la mancomunidad Vanden y Delooz. De éstos dos señores el primero habia desaparecido del palenque de la gestión de sus intereses, á partir de la fecha de 17 de Abril de 1895 (pieza primera fóllo 292) que fué cuando pidió la devolución de los privilegios de los hornos. Como complemento del hecho tercero, recuérdese que según la cláusula sexta de las condiciones facultativas era preciso, ineluctable, que á los cinco meses de la escritura de 13 de Abril, ó sea en 13 de Septiembre de 1895, la contrata se estuviese ejecutando ó por los concesionarios ó por la Sociedad subrogada, mediante transferencia aprobada en la fecha de 13 de Septiembre.

Como resultado de la discusión planteada por el Sr. Ortiz de Pinedo y de los informes de los Letrados Consistoriales, acordó el Ayuntamiento en 5 de Marzo de 1897 «que se incautará el Alcalde del servicio de limpiezas, á costa de los concesionarios, previa justificación de las infracciones cometidas por la Sociedad de Saneamiento». Se vé bien claro que el Ayuntamiento al hablar de los concesionarios se refería á los Sres. Vanden y Delooz y no á la Sociedad de Saneamiento.

No se hizo la incautación del servicio (cuya incautación de haberse hecho no significaba más sino que se dejaba sin efecto la entrega y posesión provisional y sin reserva de derecho alguno, de 24 de Septiembre de 1895) por que *al parecer* se manifestó á la Sociedad que cumplía bien los servicios (véase la pieza tercera, fóllo 1.º, escrito de Monsieur Roufosse) y entonces en 29 de Marzo de 1897, D. Gaspar Roufosse, en el escrito citado, pidió al Ayuntamiento que se le hiciera la concesión definitiva y que se le otorgara la escritura de subrogación.

Con motivo de esta instancia volviöse á plantear la cuestión de la subrogación, y el Ayuntamiento en 25 de Junio de 1897, acordó lo que á continuación se expresa, debiendo notarse que el acuerdo fué adoptado por trece Concejales y que pudiera ser nulo, si este número no era suficiente para celebrar sesión, con arreglo al art. 104 de la ley Municipal, pues no consta que se tratase de una sesión ordinaria celebrada en segunda convocatoria.

Partiendo de la validez supuesta del acuerdo se declaró el siguiente derecho por el Ayuntamiento: «1.º Que se requiriese al Director de la Sociedad para que en el término de un mes subsane todas las deficiencias que resulten en el incumplimiento del contrato y se coloque en las condiciones legales que, á juicio de los Letrados Consistoriales, necesitan para poder otorgar la escritura de subrogación pedida en 29 de Marzo del presente año. 3.º Que en el caso de que terminado el plazo no acreditase el cumplimiento de las obligaciones de su contrato, el Ayuntamiento podrá ejercitar sus derechos, conforme á la escritura de 13 de Abril de 1895. Y 4.º que si á *satisfacción* de los Letrados Consistoriales se cumplimentan *los particulares contenidos en el número primero*, el Ayuntamiento procederá á otorgar la escritura de subro-

gación á favor de la Sociedad de Saneamiento, solicitada en 29 de Marzo. Tal es el acuerdo.

En él se declara á la Sociedad el derecho de subrogación, pendiente de la condición suspensiva de que en el plazo de un mes, llenará á satisfacción de los Letrados, todas las condiciones del número primero, de manera que si los Letrados no se satisfacían, caducaba el derecho de la Sociedad para pedir que se otorgara la escritura de subrogación, y esta cuestión ó punto quedaba íntegramente como estaba antes de adoptarse el acuerdo, ó sea en situación de ser apreciado y resuelto con el criterio y las reglas que se derivan del contrato de 13 de Abril. Aunque ahora no se hace sino una relación de hechos, en obsequio de la claridad, es conveniente hacer aquí una distinción doctrinal. Mientras el Ayuntamiento no apruebe la subrogación, como no existe otro contrato que el de 13 de Abril de 1895, entre el Ayuntamiento y Vanden y Delooz, estos son los únicos que por virtud de su contrata pueden demandar al Ayuntamiento para que subrogue la concesión á la Sociedad de Saneamiento. Esta entidad no puede demandar al Ayuntamiento para nada fundándose en el contrato citado, por la sencilla razón de que no es contratista y no lo será mientras la subrogación no se apruebe.

Más como el Ayuntamiento adoptó el transcrito acuerdo, de éste nacía en favor de la Sociedad un derecho para pedir la subrogación. Con relación á la misma hay que considerar *dos derechos*, el de Vanden y Delooz, contratistas, y el de la Sociedad de Saneamiento favorecida por el acuerdo expresado.

Este último derecho era el que caducaba si no se satisfacían los Letrados, el primero quedaba en pié para discutirlo con sujeción á la contrata del 13 de Abril.

Hecha la distinción vengamos á examinar si los Letrados se satisficieron. En el informe de los mismos de 1.º de Octubre último se dice textualmente que no puede aún otorgarse la escritura aceptando la de subrogación; luego ha caducado el derecho de la Sociedad derivado del transcrito acuerdo, porque no al cabo de un mes que fué el plazo concedido para satisfacer á los Letrados, sino después de transcurridos más de tres meses, aquellos no se dan por satisfechos en cuanto á las condiciones llenadas por la Sociedad para que se aprobase la subrogación. Así es que actualmente ningún derecho de subrogación tiene la Sociedad, que consintió el acuerdo de 25 de Junio, y los únicos que pueden plantear aquella cuestión son los señores adjudicatarios Vanden y Delooz.

Termina aquí la relación de antecedentes y comienza el examen de las cuestiones legales, reduciéndolas todo lo posible.

Cuestiones legales.

Deben analizarse distinguiendo la relación de derecho entre Vanden, Delooz y el Ayuntamiento y la relación de derecho entre el Ayuntamiento y la Sociedad de Saneamiento de Bruselas.

Relación de derecho entre los Sres. Vanden, Delooz y el Ayuntamiento.

Según la segunda de las condiciones facultativas el rematante tenía el derecho de «transmitir la concesión á cualquiera Sociedad

anónima que se comprometa á llevar á debido efecto la contrata. Luego el Ayuntamiento tenía el derecho á su vez de examinar si la Sociedad se *comprometía*, por su capacidad y por las obligaciones que contrajera á cumplir la contrata, esto es, que en un orden lógico las cosas debieron pasar así.

A. Constitución de la Sociedad.—B. Contrato de cesión y transferencia entre el rematante y la Sociedad, relativo al cumplimiento completo de la concesión traspasada.—C. Examen por el Ayuntamiento de si la Sociedad estaba bien constituida y de si aceptaba y se obligaba á ejecutar el contrato.—D. Aprobación por el Ayuntamiento de la transferencia, si hallaba que la nueva entidad subrogada se obligaba debidamente y con la misma extensión, de los compromisos de los adjudicatarios cedentes.

Según los artículos 24 y 25 del Real decreto de 4 de Enero de 1883, el procedimiento para aprobar la subrogación tiene dos partes: primera, contrato de cesión y subrogación entre el rematante y la Sociedad y no entre esta y el Ayuntamiento; segunda, aprobación de la transferencia por el Ayuntamiento, mediante simple acuerdo municipal que se hace constar en el expediente. El primer requisito tiene que cumplirse antes que el segundo, porque es la materia, el objeto de éste.

Basta la *aprobación* del Ayuntamiento para que desde ese instante y según el art. 25 citado, desaparezca el antiguo contratista y sea sustituido en su lugar y derechos por el cesionario.

En el caso actual se optó porque el contrato de constitución de Sociedad y el contrato de transferencia de la concesión constasen en un mismo documento; nada se opone á ello, pero sí es esencial: primero que el contrato de cesión contenga *la aceptación explícita y terminante* por el cesionario de todas y cada una de las obligaciones que transmite el cedente, sin lo cual el Ayuntamiento, ó en general la Administración no *aprueban* el traspaso del servicio que es el segundo requisito. Para llenar el primer requisito, lo usual es que el cedente exponga los derechos que ostenta, á cuyo fin se transcribe íntegro el documento de la contrata, aquí la escritura de 13 de Abril, y que luego el cesionario acepte íntegramente todas las obligaciones y derechos que puedan derivarse del documento transcrito, más no es obstáculo, que sin transcribirse ese documento la aceptación expresa se haga con referencia á la escritura *de tal fecha* determinando su objeto y compromisos en terminos generales. Es oportuno completar esta sumaria idea de la transferencia de una contrata, añadiendo la indiscutible y hasta vulgar consecuencia, que mientras no se aprueba por la Administración el traspaso, resulta: primero, que no hay otro contratista acreedor y obligado para con el Ayuntamiento que el primitivo rematante; y segundo, que aunque se haya otorgado la escritura de cesión entre el rematante y el cesionario, mientras no las apruebe la Administración no existe *en absoluto* ni de un modo imperfecto, vínculo legal alguno entre el cesionario y la Corporación administrativa. El cesionario tendrá acciones contra el cedente, pero no puede reclamar nada de la administración hasta que se aprueba la transferencia. Dedúcese de este punto que como en tanto no está aprobada la cesión, no hay más contratista que el rematante; este se halla obligado á cumplir todas las obligaciones de su contrato hasta que cese de ser contratista, lo que ocurre al aprobarse la transferencia.

Así es, que es un principio inconcuso en materia de traspaso de

contratas, que el intentado otorgando la escritura de cesión, no extingue la responsabilidad del contratista ni lo releva en lo más mínimo del cumplimiento de todas las obligaciones del remate.

Por eso previene el art. 24 del Real decreto citado que para que el traspaso de la contrata *«sea válido es preciso que el Ayuntamiento asienta á la cesión ó transferencia, haciéndolo así constar por acuerdo que se consigne en el expediente de subasta.»* En resumen como no hay traspaso y transferencia válidos sin la aprobación *precisa* hasta que se obtiene, no hay mas contratista que el rematante, y este viene estrechamente obligado al cumplimiento de la contrata, cuyo cumplimiento legal y derechos y responsabilidades *anexas se transmiten* al cesionario desde que se aprueba la transferencia, que hasta ese instante y con relación al Ayuntamiento, no tiene más efectos que los de un intento de sustitución de una persona ó entidad obligada, por otra que la sucede en sus compromisos.

Además es previo requisito á examinar si el cedente ha cumplido con todas las condiciones que, segun el contrato, le son exigibles hasta el momento en que se formula la cesión ó se aprueba por la Corporación contratante, pues claro es que solo el cumplimiento exacto de sus compromisos, le confiere completa capacidad para la libre transmisión de sus derechos, porque el hecho de la cesión no redime ni excusa al primitivo rematante de sus obligaciones ni de las faltas en que pudiera haber incurrido hasta el momento en que la cesión se verifique, ni coloca las cosas en situación legal que impida á la Corporación contratante aplicarle todas las consecuencias y responsabilidades derivadas de sus actos interiores.

Procede examinar separadamente: A. Si el Ayuntamiento puede aprobar la transferencia intentada, y B. Cumplimiento de la contrata por el contratista en todo el tiempo transcurrido hasta que obtenga la aprobación del traspaso, si procediere aprobarla.

A.—APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA

No puede aprobarla legalmente el Ayuntamiento, por los motivos siguientes:

El cesionario, que es la Sociedad general de Saneamiento, no se ha comprometido ni obligado á cumplir el contrato de 13 de Abril de 1895.

En efecto, el *único* artículo de la escritura social que hace referencia, nada más que referencia, al contrato de 13 de Abril de 1895, es el art. 2.º que dice: «La Sociedad tiene por objeto la explotación de la concesión acordada el 13 de Abril último por la Municipalidad de Madrid para la explotación del riego y de la limpieza de las calles, el *barrido* y la *incineración* de las inmundicias y otros residuos de cualquier clase, así como su transformación en abono. Podrá contratar cualesquiera operaciones que se refieran á la higiene ó al saneamiento de ciudades ó agrupaciones, y en una palabra, todas las operaciones comerciales, financieras é industriales que tuvieren conexión con uno ú otro ramo de su industria.»

Ahora bien, en ese artículo se dice cual es *el objeto* de la Sociedad, pero no cuales son *sus obligaciones*; la Sociedad anuncia *un fin* que es la explotación de la concesión, pero *no se obliga* á verificarla.

El artículo debiera decir para que contuviera obligación: «La Sociedad acepta todas las obligaciones del contrato de 13 de Abril y se obli-

ga á cumplir todos y cada uno de los pactos de la citada escritura». Esto es lo menos que como fórmula de la obligación aceptada, podía contener el art. 2.º Imposible admitir que descripción tan somera del fin social, pueda equivaler á la obligación que contrae un cesionario.

El fin de un Arquitecto es construir edificios, pero no se obliga á construirlos sino cuando hace un pacto.

Según el art. 1.261 del Código civil, y según todas las legislaciones, «no hay contrato, sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1.º Consentimiento de los contratantes. 2.º Objeto cierto que sea materia del contrato. 3.º Causa de la obligación que se establezca».

Pues bien; el art. 2.º define el objeto del contrato entre la Sociedad y el Ayuntamiento, pero falta el consentimiento, á saber: la obligación, requisito indispensable. Y esta falta de aceptación expresa de las obligaciones que afectaban á Vanden y Delooz, tiene mayor gravedad si se tiene en cuenta que la definición del objeto es tan compendiosa, por no decir amañada, que no se habla expresamente de la transformación de las materias fecales en el art. 2.º, ni se dice nada sobre obligación tan importante como la cesión y traspaso al Ayuntamiento, en su día, de los derechos de propiedad sobre fábricas, terrenos, aparatos, etc. En una palabra, no se explica que la Sociedad no aceptara expresamente las obligaciones de Vanden y Delooz, y en la escritura social no se obliga la Sociedad á cumplir íntegramente el contrato de 13 de Abril, y como el contenido del contrato de transferencia, es la obligación del cesionario de ejecutar el servicio, se deduce que ese contrato, que es la base del otro requisito la aprobación del Ayuntamiento, falta en la escritura social.

Tampoco se ha presentado hasta el presente, en otro documento, el contrato de cesión, *base indispensable del acuerdo del Ayuntamiento*, aprobando la transferencia (artículos 24 y 25 citados); así es que legalmente la Corporación puede acordar que esa cuestión no tiene estado para resolver si procede ó no aprobar, pues no puede pedirse la subrogación sin acompañar el documento que acredite que el concesionario contrae todas las obligaciones del cedente para el caso que el Ayuntamiento asienta al traspaso. Esto es óbvio.

Acaso se alegue que la Sociedad de Saneamiento al modificar sus estatutos, se obligó al cumplimiento íntegro de la concesión, mas á esto se contesta que la modificación del art. 4.º y el nuevo párrafo segundo del mismo, no contienen tampoco el compromiso terminante de que la Sociedad acepte todas las obligaciones de Delooz y Vanden, y especialmente la de cesión y reconocimiento de la propiedad de los terrenos y fábricas á favor del Ayuntamiento para cuando termine el contrato. Medítese bien la parte modificada y se notará que la Sociedad no se obliga á nada, sino que interviene y media en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por otros, sin explicar *el concepto de la intervención*, y limitándose á reconocer la jurisdicción española y la ley española, y aun esto mismo imperfectamente, pues faltan palabras para todo lo relativo á un contrato hecho por otras personas, más no para la inteligencia y efectos de obligaciones que ella hubiera podido imponerse explícitamente. Pero, aparte que la modificación hecha no contiene tampoco el contrato de cesión, el Ayuntamiento no puede aceptar y reconocer la validez de las modificaciones introducidas, y esto por dos motivos:

Primero. Porque la convocatoria de la junta general, adolece del

defecto señalado por los Letrados Consistoriales de que no consta si los que la convocaron constituían legítimamente el Consejo de Administración al tiempo de la convocatoria.

Segundo. El art. 31 de la escritura social dice que los accionistas, tienen el derecho de votar por apoderado, que el Consejo de Administración puede determinar la forma de los poderes y que los portadores de poderes deben ser también accionistas.

A su vez el art. 42 de la misma escritura previene que para modificar los estatutos, no está válidamente constituida la Junta general de accionistas, si estos no representan la mitad, cuando menos, del capital social.

Ahora bien, el capital social es 1.500.000 francos; era preciso que concurriese á la Junta la representación, al menos, de la mitad, que es 750.000 francos. Aparece que los accionistas representaban 825.100 francos, más los accionistas números 14, 17, 19, 20, 22 y 29, concurrieron por apoderado, y no consta si el Consejo de Administración, acordó admitir poderes otorgados en *documento privado* como los que se presentaron, y además D. Bernardo Lcewensteum (núm. 22) que no es accionista por sí, (pues las acciones son propias de una Sociedad colectiva á que pertenece, y es sabido que el patrimonio de un socio no se confunde con el patrimonio de la Sociedad) representó indebidamente, por no ser accionista, á los accionistas números 17, 19 y 22 que representan 204.000 francos, sólo quedan 620.900 francos, cantidad inferior á la mitad del capital social y motivo, por tanto, de nulidad evidente de los acuerdos todos adoptados en la Junta general de 5 de Mayo de 1897.

Queda, por tanto, en pié la afirmación de que actualmente la Sociedad de Saneamiento no ha aceptado la obligación de cumplir el contrato de 13 de Abril de 1895, sin cuyo requisito no puede aprobarse una transferencia, un contrato de cesión que no existe.

Mas se dirá que la Sociedad está dispuesta á otorgar, obligándose en ella, la escritura de subrogación, entre la misma y el Ayuntamiento. Esto no es lo legal, pues lo que se ajusta al Real decreto de 4 de Enero de 1883 es que el contrato de subrogación se otorgue entre el rematante y la entidad que quiere subrogarse, para que apruebe luego el Ayuntamiento el traspaso, sin cuya aprobación la cesión no sería válida.

Escritura de subrogación.

Aun animado el Ayuntamiento del mejor deseo no debe aprobar la subrogación ni otorgar la escritura aceptándola, por estos motivos:

1.º Porque siendo nulos los acuerdos de la Junta general de 5 de Mayo respecto del domicilio social, queda en pié el art. 4.º de los estatutos y los Administradores de la Sociedad carecen de facultades para obligarla, estipulando obligaciones contrarias á la escritura social.

2.º Porque el art. 21 de la escritura social no faculta á los Administradores *para ceder* al Ayuntamiento el derecho de propiedad sobre las fábricas, terrenos y aparatos, sino para enajenar, y aunque la cesión es una enajenación, el haberse omitido la facultad de ceder, en relación con la defectuosa redacción del art. 2.º, impide afirmar que los Administradores puedan obligar á la Sociedad á reconocer el derecho de propiedad del Ayuntamiento á la terminación del contrato.

3.º Porque si el Ayuntamiento acepta la escritura social con la cláusula de que la Sociedad puede disolverse cuando lo tenga por conveniente, llegado el caso de que aquella disolución acaeciera, el Ayuntamiento habría de consentirla y no tendría acción por daños y perjuicios, puesto que además falta la cláusula de que la Sociedad *se obliga* por treinta años á cumplir el contrato. No existe paridad jurídica entre la situación de una Sociedad que se *niega* á cumplir su convenio y la de otra que no puede cumplirlo por haber sido disuelta en virtud de estipulaciones de la escritura social; se consigna esta distinción necesaria por las observaciones que respecto al caso han expuesto los Letrados Consistoriales: en el primer caso habría acción de daños y perjuicios; en el segundo, no. Si en la escritura se consignara que la Sociedad no puede disolverse durando por lo menos treinta años, una vez inscrita en el Registro Mercantil, de nada valdría un acuerdo contrario de los accionistas, y en cuanto fuera posible, mediante la fianza eficaz que ha debido exigirse, el contrato continuaría cumpliéndose.

4.º Porque según la inteligencia de los artículos 4.º y 53 de los estatutos, toda cuestión entre los Administradores de la Sociedad y la misma, puede ventilarse en el extranjero. Según el art. 21, que contiene frases tan estudiadas como la de que los poderes conferidos al Consejo de Administración *son y no son limitativos*, el Consejo otorga la escritura de subrogación, y por los pactos que contenga, le parece luego á la Sociedad que el Consejo se ha excedido en el uso de sus facultades. Planteada esta cuestión en Bélgica, obtiene una sentencia contra el Consejo, declarando que al abrogar la escritura de subrogación, se excedió del contenido del art. 21. Viene luego á España con esa sentencia y pide la nulidad de la escritura ante nuestros Tribunales.

Como se vé, la cuestión vendría ya prejuzgada por un Tribunal extranjero, y ésta es una manera de eludir el Real decreto de 4 de Enero de 1883, en cuanto dispone la renuncia del fuero.

5.º Porque los Sres. Letrados Consistoriales en su dictamen de 1.º de Octubre último, informaron que no están cumplidas las condiciones 7.ª y 79 del pliego que sirvió de base en la subasta, ni consta se haya llevado á efecto lo dispuesto en la 84, ni parece acreditado en debida forma que la Compañía de Saneamiento tenga los semovientes necesarios para los servicios de que se ocupan las condiciones 25, 33, 43 y 94, por cuanto las copias simples presentadas á este efecto, no ofrecen garantía alguna legal de autenticidad; añadiendo además que no aparece justificado que la Junta general de accionistas de la Sociedad, verificada el día 5 de Mayo próximo pasado, se constituyera en debida forma; circunstancia bien digna de tenerse en cuenta, toda vez que en dicha Junta se reformaron los estatutos sociales y se acordó conferir poder al Sr. Roufouse para representar á la Compañía en este acto.

Esto en cuanto á las manifestaciones formuladas ó compromisos contraídos respecto de la aceptación del contrato para los servicios de limpiezas por la Sociedad general de Saneamiento al constituirse y formular sus estatutos; pues aparte de ello, importa examinar qué derechos son los que recibió la Sociedad de los Sres. Vanden y Delooz, y cuáles eran los que obtenía del Ayuntamiento, por virtud de la entrega provisional de los servicios en 24 de Septiembre de 1895.

La condición sexta del pliego determina que el rematante ó la So-

ciudad anónima, principie á prestar todos y cada uno de los servicios que son objeto del contrato, al cumplirse CINCO MESES, contados desde el día en que el Ayuntamiento hubiese otorgado á su favor la oportuna escritura en que se *adjudique la referida contrata*.

El plazo hállase claramente expresado, y el término desde donde ha de empezarse á contar es desde la adjudicación de la contrata, y como ésta tuvo lugar á favor del rematante por escritura pública de 13 de Abril de 1895, el plazo vencía en 13 de Septiembre.

Cómo habría de empezarse la prestación de todos y cada uno de los servicios, lo consigna la condición séptima, determinando que para ello el rematante deberá tener adquirido y en disposición de funcionar los terrenos de su propiedad y todo el material necesario, incluyéndose en él los carros, escobas mecánicas, máquinas, cubas, ganado mular y caballar y cualquiera otro que sea preciso para el buen desempeño de dichos servicios, debiendo también hallarse terminada para esa fecha la construcción de los hornos de incineración ó cremación y la fábrica ó fábricas donde hayan de transformarse y destruirse las materias fecales y animales muertos.

Verdad es que no se formalizó la correspondiente acta respecto de tan interesantes particulares al hacerse la entrega de los servicios en 24 de Septiembre, y no se puede fijar documentalmente en relación á aquella fecha los elementos de que disponía el rematante ó la Sociedad, para empezar el cumplimiento de los servicios, pero de que su situación no sería muy lisonjera para que aquellos tuvieran el ejemplar desempeño que exige la capital de España, y de que no se hallarían cumplidos los requisitos que demanda el art. 7.º del pliego, dá buena idea el que á los cuatro meses de aquella fecha al informar los Letrados Consistoriales con referencia á la justificación que se había exigido posteriormente á la Sociedad respecto del cumplimiento del contrato, manifiestan que consideran incumplidas por parte de la Compañía, la condición séptima por no estar aún constituida la fábrica de transformación de materias fecales y animales muertos, é igualmente las condiciones 16, 21 y 33 del pliego.

Queda con esto notoriamente evidenciado que los Sres. Vanden y Delooz había dejado incumplida la condición 6.ª del contrato firmado en 13 de Abril de 1895 y, por tanto, se hallaban incurso en la aplicación del segundo párrafo de la misma condición, «Que si llegado ese día (el de cumplimiento del plazo de los cinco meses) no comenzaran á cumplir sus obligaciones escriturarias, *con sujeción á las condiciones establecidas*, quedará caducada la concesión y sin ningún valor ni efecto y sin perjuicio de las responsabilidades, en que por falta de cumplimiento haya incurrido el contratista.

Pasado el día 13 de Septiembre y estando entonces incumplidas algunas de las condiciones del remate, es evidente que los Sres. Vanden y Delooz había incurrido en una de las causas de caducidad del contrato determinadas en el pliego que sirvió de base á la subasta.

Al entregarse de los servicios la Sociedad de Saneamiento, lo hizo con un título provisional, sin prejuzgar derecho alguno á su favor, en forma, que ni en derecho ni de hecho se reconoció en ella la continuación de la personalidad de rematante del contrato de los servicios de limpiezas; tampoco ha contraído méritos para que se la considere purgada de los vicios y defectos señalados respecto á los primitivos concesionarios.

En el contrato especial que surgió entre el Ayuntamiento y la Sociedad, si bien no se le reconocía ni se prejuzgaban derechos, en cambio ésta se obligaba á la prestación de servicios, con arreglo al pliego de condiciones que sirvió para la contrata con Delooz; y el Ayuntamiento, deseoso de salir de la anormal situación creada, acordó en 25 de Junio último, invitar á la Sociedad para que en el término de un mes subsanase las deficiencias que resultaran por el incumplimiento de su contrato para poder otorgar á su favor la escritura de subrogación, ó en otro caso ejercitar los derechos que al Ayuntamiento asistieran, conforme á la escritura de 13 de Abril de 1895.

Dedúcese de todo esto que, aparte de que los Sres. Vanden y Delooz habían incurrido ya en una causa de caducidad del contrato, según queda dicho, la Sociedad tampoco adquirió, por la cesión que la hicieron aquellos, derecho alguno contra el Ayuntamiento, toda vez que los efectos de la transferencia no son obligatorios para la Corporación hasta tanto que ésta haya asentido á la cesión, según preceptúa el artículo 24 del Real decreto de 4 de Enero de 1883. En cambio por la entrega interina y provisional se creó un nuevo y especial vínculo entre el Municipio y la Sociedad de Saneamiento, estableciendo una relación jurídica que hubiera llegado á perfeccionarse y habría podido servir de base para establecer un estado definitivo de derecho con la consiguiente aprobación de la transferencia realizada por los rematantes, si dicha Sociedad se hubiese colocado en condiciones de que la subrogación fuese aprobada.

Esto por parte de la Sociedad. En cuanto á los derechos que el Ayuntamiento pueda ejercitar contra ella claramente se desprenden de lo expuesto. Es ilógico, absurdo, el admitir que la Sociedad se encargase de prestar servicios tan importantes sin un cuerpo de reglas que presidiese el desarrollo de aquéllos y que desempeñase su cometido de *mandato* sin una norma preestablecida. La misma Sociedad que aceptó la reserva hecha por el Ayuntamiento respecto á los derechos que la había de conceder, se obligaba á prestar los servicios conforme al pliego de condiciones; por eso el Ayuntamiento ha venido exigiéndoles constantemente el cumplimiento de todas las cláusulas de aquél, según demuestran múltiples requerimientos que existen en los expedientes; por eso se ha procedido en la imposición de multas, observándose la tramitación y guardándose la cuantía establecida en los pliegos de condiciones, y por eso finalmente, deberán aplicarse las penalidades señaladas en aquéllos por las infracciones que la Sociedad hubiese cometido.

De tal naturaleza es la relación jurídica existente entre la Sociedad y el Ayuntamiento; y así lo demuestra, no solo la práctica observada sin protesta, sino la consideración de que no es necesaria escritura ni otra especial declaración del Ayuntamiento para ello, pues el contrato, de cualquier modo que se haya formulado la voluntad de los contratantes, constando como consta esto y siendo cierto el objeto sobre que versa, hace obligatorio é ineludible el cumplimiento de lo convenido.

Indemnización de perjuicios.

Es indudable y evidente, que la Sociedad general de Saneamiento, está obligada á indemnizar los que ha causado al Excmo. Ayuntamiento por el incumplimiento de las condiciones en que debiera haber des-

empeñado los servicios de limpieza, riegos, etc., que le fueron encomendados.

Ya queda dicho anteriormente, que se hizo á la Sociedad de Saneamiento una entrega con carácter interino y provisional de los mencionados servicios, sin firmar con ella contrato alguno, es claro que había de ejecutar su cometido, sometiéndose á reglas determinadas, y no á su voluntad y capricho. Y estas reglas, no pueden ser otras, que las mismas establecidas en el pliego de condiciones que sirvió para la subasta. La Compañía ha faltado á ellas, ha infringido repetidamente las obligaciones que contrajo, al aceptar los servicios; impidiendo con ello, que el Ayuntamiento pueda aprobar la subrogación otorgada á su favor por el primitivo contratante.

Todo esto trae, como consecuencia necesaria, que ese servicio quede en suspenso; que la Compañía no pueda seguir, prestándolos y que la Corporación Municipal tenga que adoptar inmediatamente y con la mayor premura, las medidas necesarias é indispensables para que no se interrumpan aquéllos, originándose de aquí gastos y perjuicios, que deben ser abonados por la Sociedad de Saneamiento.

Constituye también otro perjuicio de no poca cuantía, la falta de las ventajas que había de obtener el Municipio, por la adquisición de los bienes inmuebles y efectos de la Sociedad, á la terminación del contrato, todos los cuales habrían de pasar á su poder, en plena propiedad.

Es otro perjuicio posible, el que se ocasionaría por la necesidad de celebrar nueva subasta y por los dispendios que con ella se produzca. Todos estos perjuicios deben ser indemnizados por la Sociedad de Saneamiento, respondiendo de ellos con sus bienes, ya que no existe prestada fianza alguna, de conformidad con lo establecido en el caso segundo del art. 32, en proporción con lo preceptuado en el párrafo segundo del art. 12 del Real decreto de 4 de Enero de 1883, sobre contratación de servicios públicos.

Conclusiones.

Demostrada la caducidad del derecho de los Sres. Vanden y Delooz, por incumplimiento de las condiciones 6.^a y 7.^a del contrato y habida aplicación del párrafo 2.^o de la misma condición 6.^a

Demostrado igualmente que la Sociedad de Saneamiento en 21 de Septiembre de 1895 se obligó para el cumplimiento de los servicios á la observación del pliego de condiciones de la contrata, y que, adoptado el acuerdo de 25 de Junio último consentido por aquélla, no se ha colocado dentro de las condiciones legales vigentes, así las que se derivan del contrato, que en manera ni detalle alguno puede alterarse, como las exigibles por consideraciones generales de la legislación:

Entiende la Alcaldía Presidencia que el Ayuntamiento debe adoptar los siguientes acuerdos:

Primero. No ha lugar á aprobar la transferencia de la contrata de 13 de Abril de 1895, intentada por la Sociedad general de Saneamiento y los Sres. Vanden y Delooz, por no acreditar la referida Sociedad las condiciones legales necesarias para contratar ni obligarse con el Ayuntamiento á la prestación de los servicios de limpiezas, etcétera, y por no haber acreditado todos los demás requisitos en el plazo que se le señaló por el acuerdo municipal de 25 de Junio último.

Segundo. Se declara caducado, y, por tanto, rescindido el contrato celebrado ante el Excmo. Ayuntamiento y los Sres. Vanden y Delooz, por escritura de 13 de Abril de 1895, para los servicios de limpieza, riegos, extracción y destrucción de basuras, desagües de pozos negros, destrucción de materias fecales y recogida de animales muertos, en todo el perímetro de Madrid, su ensanche y su extrarradio, é igualmente se declara terminado el encargo conferido á la Sociedad general de Saneamiento, por virtud de la entrega provisional de los servicios que se le hizo en 24 de Septiembre de 1895, y, en su consecuencia, conclusas todas las relaciones jurídicas existentes con la misma, y rescindidos los compromisos y obligaciones derivados de la referida entrega provisional, quedando en suspenso el contrato desde esta misma fecha hasta que este acuerdo sea ejecutorio.

Tercero. Que para hacer efectivas las responsabilidades contraídas por incumplimiento de las obligaciones del contrato, y para indemnizar al Ayuntamiento de los perjuicios que se le han irrogado por la misma causa, con arreglo á lo establecido en el caso segundo del artículo 32 del Real decreto de contratación de servicios públicos, en relación con lo preceptuado en el párrafo segundo del art. 12 del mismo, se acuerda la incautación provisional, bajo inventario, de los bienes muebles, inmuebles y ganado destinado á los servicios de referencia, bajo el debido inventario.

Cuarto. Interinamente se autoriza á la Alcaldía Presidencia para que organice y realice los servicios en la forma que se hacía antes de la subasta y satisfaciendo su importe con cargo á la cantidad de pesetas ⁶⁵⁰⁰⁰⁰ ~~300.000~~, consignada para pago de los mismos á la Sociedad en el cap. III, art. 3.º del presupuesto vigente.

Las conclusiones transcritas reflejan de un modo exacto la opinión del Alcalde Presidente acerca del asunto que tanto interesa, por múltiples conceptos, á la Villa de Madrid. Para llegar á tales conclusiones, la Alcaldía ha hecho detenido y meditado estudio de la cuestión, inspirándose en la más estricta justicia y oyendo las voces inapelables de su deber.

La Comisión que ha confiado tal ponencia al Alcalde, sin previos requerimientos del mismo, debe entender que el presente escrito representa la opinión del que lo formula y que á sus intenciones ha de atenderse, porque así se lo demanda su conciencia, y también porque así entiende servir á los intereses del pueblo de Madrid, que en la cuestión presente ha fijado con anterioridad su mirada y que hoy la sigue con interés en espera de una solución en armonía con las legítimas aspiraciones de nuestros administrados.

Madrid 14 de Noviembre de 1897.

Conde de Romanones.



